

El Gato de Panamá

Daniel do Campo Spada

PDF
GRATIS

*Corrupción económica
de los jerarcas macristas*

TV

Mundus



COLECCIÓN

Los Archivos del Régimen

Entre 2015 y 2019 la República Argentina tuvo su primer gobierno de ultra-derecha que llegó al poder por medio de las urnas.

Los empresarios ligados al PRO, corruptos en su casi totalidad, se apropiaron del país repitiendo las prácticas económicas anti-comunitarias y egoístas que los caracterizan.

Los Archivos del Régimen

es una colección del Grupo TV Mundus destinada a conservar la memoria sobre el oscuro período que la República Argentina vivió entre 2015 y 2019. Las libertades políticas y la libertad de opinión se vieron comprometidas en un proceso que implicó la suspensión de la democracia.

Este No es un libro académico.

Es un texto urgente.

Daniel do Campo Spada
es Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social (UBA),
Profesor Universitario en Ciencias de la Comunicación (UK),
Especialista en Metodología de la Investigación Científica (UNLa)
y Magister en Historia Contemporánea (UNGS).

El Gato de Panamá – Daniel do Campo Spada

El gato de Panamá

*Macri y el PRO
con negocios al borde
de la legalidad.*

**Colección
LOS ARCHIVOS DEL RÉGIMEN**

Prof. – Lic. Daniel do Campo Spada

GRUPO
TV MUNDUS

Canning
TVMundus.com.ar

Campo, Daniel Raúl do

El Gato de Panamá : corrupción económica de los dirigentes macristas / Daniel Raúl do Campo. - 1a ed. - Canning : Daniel Raúl do Campo, 2021.

90 p. ; 21 x 14 cm. - (Los Archivos del Régimen ; 3)

ISBN 978-987-88-0718-8

1. Economía Argentina. I. Título.

CDD 330.0982

Fecha de catalogación: Agosto 2021

Hecho el depósito Ley 11.723

ddocampo@tvmundus.com.ar

Queda prohibida la transcripción no autorizada por cualquier medio de reproducción oral, gráfico o electrónico sin previa autorización de su autor.

Actualización sobre estos temas en www.TVMundus.com.ar .

Agosto 2021. Primera Edición.

EDICIÓN GRATIS en PDF

<https://noticias.tvmundus.com.ar/libros-en-pdf/>

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN (7)

Capítulo 1

De buitres y narcos. (9)

En el momento de la tragedia, Macri estaba de vacaciones. (11)

En el galpón de Paul Singer se quemó documentación del HSBC. (13)

Macri encabezó en Buenos Aires cumbre de empresarios evasores y golpistas. (14)

El oficialista diario Clarín con cuentas en el exterior. (17)

Narco-paraiso macrista. Los grandes carteles de la droga en Argentina. ()

Capítulo 2

Macri y los mercados *offshore*. (22)

La investigación quedó paralizada. (30)

Macri y su familia logran desviar atención por sus empresas clandestinas. (32)

Capítulo 3

La corrupción generalizada en el PRO. (35)

El Lava Jato salpica a Macri. (39)

- La causa judicial. (42)
El apresurado viaje de Macri a Brasil. (45)
Alianza entre la droga y el PRO. (47)
Acusan de malversación de fondos a María Vidal. (48)
Estafa electoral. La justicia encubrió a María Vidal. (49)
Un narco aportó para la campaña de María Vidal. (52)
Increíble resarcimiento a las empresas de Gas. (54)
Stolbizer, aliada de Macri, intenta despegarse del Vidalgate.
(56)
El Intendente PRO de Vicente López, Jorge Macri, también
tenía empresas offshore. (56)
El Intendente PRO de Lanús tenía una cuenta en paraísos
fiscales. (58)
Avruj, del PRO, también tenía una empresa fantasma. (60)
Gerónimo alias “Momo” Venegas tenía una empresa en
Estados Unidos. (61)

Epílogo (63)

INTRODUCCIÓN

Excepto en Argentina, donde se ocultó, el mundo se escandalizó con la mayor filtración de corrupción en el mundo. Más de trece millones de documentos de paraísos fiscales comenzaron a ser difundidos por el *Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación* (ICIJ por sus siglas en inglés) y sacudió a la mayoría de los gobiernos del mundo. Desde la reina de Gran Bretaña hasta Ministros de Mauricio Macri se vieron involucrados en las revelaciones de empresas *offshore* para evadir impuestos y esconder fortunas personales.

Los documentos fueron filtrados del estudio de abogados Appleby y los mismos fueron estudiados por 190 medios de comunicación del mundo entre los que se encuentra el británico *The Guardian* que era uno de los sostenedores de la investigación global. Como consecuencia que desde Argentina participaba el diario ultraderechista *La Nación*, se escondieron los datos obtenidos para proteger a los macristas antes de las elecciones nacionales. Se conocían maniobras incompatibles con sus deberes de funcionarios públicos a los Ministros de Finanzas y de Energía, Luis Caputo y Juan José Aranguren respectivamente.

A nivel internacional estaban involucrados la monarquía inglesa (incluido el príncipe Carlos), funcionarios del régimen norteamericano como el caso del asesor Robert Kraft, los

dueños de Twitter, Facebook, Mercado Libre, las universidades de Cambridge, Oxford y la Nacional de Tucumán entre otros. Fundaciones ligadas a los partidos de derecha a nivel mundial radicaban sus dineros sucios en paraísos fiscales para esconderlos de los fiscos de sus países y poder de esa manera utilizarlos en sobornos y prebendas en un mecanismo similar al de las “fundaciones” del PRO.

En el caso de los Panamá Papers el escándalo forzó entre otros a la renuncia del Primer Ministro de Pakistán, Nawaz Sharif y otros funcionarios de Islandia y Australia. En Argentina el tema ni dañó al Presidente Macri y su familia (incluida la de su esposa Juliana Awada) que habían desviado fondos.

Capítulo 1

De buitres y narcos.

En febrero de 2014, uno de los dueños de la empresa Iron Mountain que fue protagonista de un sospechoso incendio fatal era el empresario dueño de fondos buitres Paul Singer. Ese personaje, que buscó la destrucción de la Argentina para aumentar sus ganancias espurias al no haber entrado en el acuerdo de deuda (al que sí ingresó el 93 % de los acreedores) se entrevistó con Mauricio Macri en el Foro de Davos, donde analizaron las formas de acorrallar al gobierno de Cristina Fernández y su economía. Una investigación fiscal que había sobre algunas de las empresas que guardaban allí sus documentos despertó todas las suspicacias. El mencionado individuo era uno de los selectos contribuyentes con la Fundación Vital Voices que fundó la legisladora macrista Laura Alonso.

Aunque la investigación judicial aún no disponía de las pericias técnicas que lo confirmaran, a todas luces el incendio del galpón que la empresa tenía en el porteño barrio de Barracas era a todas luces una estrategia para ocultar las maniobras que algunos de sus clientes (entre ellos el HSBC que trabajó en la conspiración inflacionaria con Shell, que también

escondía allí sus papeles) habrían cometido durante el intento de golpe inflacionario de enero de ese año. Un día antes del siniestro (probablemente intencional) el Banco Central de la República Argentina (BCRA) había comenzado la investigación en la que estaban involucrados u\$s 6.500 millones de dólares.

Paul Singer, quien es un activo participante del Foro Económico de Davos, en el que se encuentran los poderosos del mundo, la mayoría de los cuales obtuvieron fortunas en base al hambre de pueblos enteros se entrevistó con Mauricio Macri. El por entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires era uno de los principales candidatos de la ultraderecha argentina y fue el único de esa nacionalidad que se mostró en el evento.

Por otra parte Singer fue el responsable de la detención extorsiva a que fue sometida la Fragata Libertad en el puerto de la capital de Ghana. El NML Elliot Capital Management es dueño de NML Capital que compró deuda argentina para no ingresar al acuerdo logrado por el ex Presidente Néstor Kirchner intentando obtener rendimientos de usura. Por ello sus personeros persiguieron a todas las naves estatales en cuanto puerto o aeropuerto con justicia corrupta pudiera haber para molestar al país.

Singer, además era el principal sostenedor de un grupo de comunicación destinado a desprestigiar al país, que a través de diarios, radios, canales de televisión e internet difundían mensajes anunciando “el fin de la Argentina”. El Grupo de Tareas Argentina (ATFA por la sigla en inglés) era auspiciante de programas de columnistas de ultraderecha como los que disponía la cadena FOX en Estados Unidos y con nombre oculto emitían programaciones completas en las principales

AM y FM de Buenos Aires.

La empresa especialista en la destrucción de documentación fue premiada en el año 2009 por Mauricio Macri, quien desautorizó al inspector Edgardo Alonso (Ingeniero en Seguridad Industrial) que había anunciado el riesgo potencial de las instalaciones. Tras el desplazamiento del profesional, nunca nadie volvió a molestar a los dueños de Iron Mountain, muy amigos del PRO macrista.

Singer es un activo sostenedor de la Fundación Vital Voices que reúne a las mujeres empresarias con tendencia derechista en todo el mundo. En Argentina, Laura Alonso, ladera legislativa de Macri (hijo) es una de sus más activas dirigentas, organizando reuniones en las que se habla “de lo mal” que le va al país y se critica permanentemente a los Gobiernos democráticos.

En el momento de la tragedia, Macri estaba de vacaciones.

El sitio de noticias *INFONEWS* dio a conocer una sospecha que se extendió desde un primer momento respecto a que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había estado nuevamente de vacaciones al momento de la tragedia en los depósitos de la sospechosa empresa Iron Mountain en la que perdieron la vida nueve personas. A la información de los colegas, al día siguiente funcionarios y militantes del PRO (partido de la derecha macrista) expresaban “cada vez que pasa algo este boludo está descansando”.

INFONEWS consideraba que la llegada a las 19 hs al lugar de la tragedia, en la que el fuego comenzó al principio de la jornada, era un claro indicio de que se encontraba fuera y lejos de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque su equipo (como a él le

gustaba llamar a su gabinete) estaba presente, cuando a media mañana el fuego tornó en la muerte de seis policías federales, un voluntario y dos rescatistas, sus asesores de imagen le ordenaron volver apresuradamente a la Capital Federal.

TV Mundus y *ECO Informativo* no fueron atendidos por las autoridades de Aeroparque para confirmar si un avión particular había llegado a esa estación aérea, aunque un fuerte indicio indicaba que lo habría hecho a través de una empresa privada de aerotaxis con base en el Aeropuerto de San Fernando en el Partido de Tigre, controlado por personal allegado a Sergio Massa.

A un año de los hechos, todavía falta el peritaje de los escombros que estaban realizando el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Después de doce meses aún no los había recibido la fiscal Marcela Sánchez para tratar de avanzar en la investigación del incendio que le costó la vida a diez personas (entre bomberos y rescatistas). La empresa de archivos Iron Mountain pertenecía al financista dueño de los fondos buitre que litigaban contra la Argentina. Paul Singer mostraba a la luz de los hechos que tenía influencia en el Poder Judicial argentino.

La Fiscal Marcela Sánchez, a cargo interinamente de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 37 buscaba determinar si el fatal incendio fue accidental o intencional. La mayoría de las hipótesis llevaban a esta segunda posibilidad, ya que allí se encontraban los archivos de HSBC, banco investigado por lavar dinero en cuentas en Suiza y actuar especulativamente en el mercado de divisas local. En esta

misma sospecha se encontraba la compañía petrolera anglo-holandesa Shell que nada curiosamente depositaba también allí la documentación¹.

*En el galpón de Paul Singer
se quemó documentación del HSBC.*

El miércoles 13 de agosto de 2014 la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanó tres sedes del Banco HSBC, sospechoso directo de maniobras fraudulentas en el lavado de dinero y evasión impositiva. Desde 2009 se sospechaba que creaba cuentas fantasmas de empresas inexistentes para simular gastos que le permitiera a alguno de sus clientes desviar dinero que correspondería al pago de ganancias. Las facturas estaban depositadas en los galpones de la empresa Iron Mountain de Paul Singer (buitre) que se incendió en forma intencional provocando la muerte de los servidores públicos.

El Banco, de capitales extranjeros realizaba esta maniobra dolosa que perjudicaba a la recaudación pública en cientos de millones (la última de las investigaciones indicaban que habrían lavado \$ 224 millones a valores de 2008) desde hace casi una década. Cabe acotar que fue el banco cómplice del Presidente de la petrolera angloholandesa Shell, Juan José Aranguren (quien luego fue el Ministro de Energía durante el régimen macrista), que salió a comprar dólares en enero de 2014 a un precio superior al de mercado para forzar una distorsión cambiaria.

¹<http://www.fiscales.gov.ar/fiscalias/iron-mountain-esperan-los-informes-de-los-peritajes-sobre-los-escombros/>

Las sedes allanadas fueron las de Florida al 200 y las sucursales de las localidades de Caseros y Avellaneda, que era donde estaban radicadas las empresas fantasmas que generaban boletas de servicios que jamás se prestaban pero que simulaban gastos para los clientes Premium, que luego recobraban ese dinero (con cierta comisión en negro para el banco) evadiendo el pago de impuestos.

Distribuidora SA y Recaudaciones y Servicios del Sur SRL estaban en la investigación instrumentada al banco. Red de Multiservicios SA, por ejemplo, en solo seis meses \$ 172 millones en una de esas cuentas fraudulentas. En el año 2009 la AFIP comenzó su denuncia en el Juzgado del Juez López Biscayart (Juzgado Nacional en los Penas Tributario N° 1) y en 2013 en el Juzgado N° 3 de la Jueza María Verónica Straccia.

*Macri encabezó en Buenos Aires
cumbre de empresarios evasores y golpistas.*

En mayo de 2016 y hablando en inglés el Presidente de Argentina Mauricio Macri encabezó en el Centro Cultural Kirchner (que permaneció cerrado al público desde que llegó al poder) un encuentro de empresarios internacionales llamado “Mini-Davos”. Organizado por el evasor Ricard Attias prometieron inversiones que nunca llegaron en carácter productivo. Solo lo hicieron en forma especulativa.

Los 1632 presentes integraban las listas de evasores de los Panamá Papers develada unos meses antes. Allí figuraban empresarios evasores con fuertes dineros de origen espurio en las catacumbas de los paraísos fiscales. Otros son conocidos sostenedores de dictaduras como las de Corea del Sur, Afganistán, Irak, Libia y Arabia Saudita, mientras que el resto

pertenecen a los círculos golpistas de Brasil, Honduras y Paraguay. No faltaron los sostenedores de los regímenes de Estados Unidos, Colombia, Perú y la mayoría de los países de Europa.

Junto a los empresarios estuvieron economistas neoliberales que debatieron en mesas redondas las formas para lograr un mayor ajuste a las clases trabajadoras a nivel mundial en general y de la Argentina en particular. Todos los oradores (José Luis Espert entre ellos) veían como contrario a la rentabilidad empresarial las leyes laborales del país. Dijeron que la indemnización era una injusticia y que la misma debía ser pagada por el propio trabajador contratando un seguro.

Este circo de evasores y delincuentes financieros se pavoneó en Buenos Aires porque con Macri se sentían ganadores, mientras sus dineros seguían paseando por Bahamas y Panamá, principales paraísos financieros en los que guardan sus dineros... para evadir impuestos.

Cuando se quedó con los empresarios locales un Macri desesperado llamó de urgencia a sus amigos millonarios. Ante una crisis social y laboral innegable incluso para los medios de comunicación de la ultraderecha (*Clarín, La Nación, Infobae y Perfil*) el Presidente los convocó en forma urgente a la Casa Rosada. Les pidió que al menos por tres meses detuvieran los despidos y trataran de contratar “a alguien” para cambiar la imagen que ya se había instalado en la opinión pública. Como los Panamá Papers e incluso el “bluff” de Lázaro Báez llegaban hasta su dormitorio reclamaba desesperadamente que lo rodeen. Quería evitar que la Cámara de Diputados sancionara la ley anti despidos y de esa manera evitarle el costo al macrismo de tener que vetar algo tan sensible.

La Casa Rosada se convirtió en un salón en el que se encontraron viejos amigos, la mayoría de ellos empresarios incluidos en la primera y en la segunda lista emitida por el consorcio de investigación periodística *ICJ* que develó de qué forma las grandes fortunas siguen acumulando dinero evadiendo al Estado. En diciembre de 2015 imaginaron que estaban más seguros que nunca, disponiendo del Poder Ejecutivo Nacional, del de la CABA y la Provincia de Buenos Aires, el Poder Judicial, los medios de comunicación concentrados y el dinero suficiente para sobornar a la mayoría de los Diputados y Senadores. No imaginaron que la gente empezaría a cansarse a solo cinco meses de gobierno.

Los presentes firmaron una nota tan híbrida como vacía que nos remite a la frase del ex Ministro de Raúl Alfonsín (Pugliese) que había manifestado que les había hablado con el corazón y les habían respondido con el bolsillo.

El texto decía:

“Ante el momento de cambio positivo que está viviendo la Argentina y de transición económica que genera dificultades de corto plazo en los argentinos, nosotros como empresarios, desde nuestro rol de generadores de empleo y producción, queremos comprometernos a:

-No reducir nuestros planteles de empleados durante al menos los próximos 90 días.

-Generar planes de inversión para promover más puestos de trabajo.

-Trabajar junto al gobierno nacional y a los sindicatos en una agenda de desarrollo y de mejora de calidad del empleo en el país, sector por sector.

-Por el contrario, consideramos que la propuesta de ley anti despidos que tiene media sanción en el Congreso introduce un

cepo al trabajo que dificulta las nuevas inversiones y generará el efecto contrario al que dicen buscar”.

Macri pidió en un breve discurso (como eran todos los suyos) que “pongan el hombro”. En el recinto de la Casa de Gobierno eran conscientes de que este era “su” gobierno y que no querían que se les caiga porque el escarmiento puede tronar en contra del latrocinio de corrupción y de administración para ricos que el mandatario comenzaba a sintetizar incluso en sectores que lo votaron apenas medio año antes. Había ruido a derrumbe y apelaba a un manotazo de ahogado.

El oficialista diario Clarín con cuentas en el exterior:

El grupo de medios oficialista *Clarín* tenía empresas en paraísos fiscales hacia los que habría destinado dineros que de esa manera lograban evadir impuestos. El CEO de la compañía, Héctor Magnetto dispone aún hoy de un grupo de al menos cinco empresas en paraísos fiscales de Panamá y Estados Unidos. La offshore East River Associates Corporation serviría para un complejo entramado de transferencias que permitirían cubrir la fuga de capitales.

Las principales fortunas de Argentina tenían escondidas en el exterior un estimado de u\$s 400.000 millones, casi el 60 % del Producto Bruto Interno de 2015. Desde la llegada de Mauricio Macri al poder reinaba la total impunidad ya que se desmantelaron las oficinas que investigaban esto en la Unidad de Investigación Fiscal (UIF) y la Procuraduría Criminal del Lavado de Activos (PROCELAC). Además el Presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Federico Sturzenegger desactivó a los empleados que investigaban el

lavado de dinero y despidió a 47 trabajadores.

La mencionada compañía de Magonetto en la que estarían implicados varios directivos se ubicaba en New Jersey, con cuentas en varios bancos en Delaware, Bahamas e Islas Vírgenes. La misma se abrió en el año 2001, cuando la fuga de dinero se hacía en camiones que cargaban aviones en el Aeropuerto de Ezeiza con bolsas de dólares. Luego, el Grupo Clarín se benefició con la pesificación de sus deudas y una ley que impedía su apropiación por empresas extranjeras. Esto había sido obtenido a cambio de protección al Gobierno de Eduardo Duhalde y vulgarmente esa “protección a las organizaciones culturales” se llamó “Ley Clarín”.

Narco-paraiso macrista.

Los grandes carteles de la droga en Argentina.

En la versión de la ópera “Carmen” que interpretó para el cine la actriz argentina Niní Marsall como “Catita”, un Guardia Civil en la frontera le arrojaba la carga de una carreta a un pobre guajiro buscando contrabando. Para su decepción solo había pasto y paja. Y así sucesivamente sin encontrar “contrabando”. Lo que el uniformado no lograba ver era que el dócil campesino contrabandeaba... carretillas. Apenas asumió el macrismo en la Argentina devaluaron el peso en un 42 % en solo 48 hs de libre mercado. El poder adquisitivo de los trabajadores se licuó en un volumen equivalente. Mientras tanto, otros grandes jugadores (en tiempos de colonización cultural le dicen “players”) estaban haciendo su agosto gracias al PRO.

Con el festival financiero en la época de Carlos Menem los carteles de la droga que habían tomado a la Argentina como

país de paso de a poco empezaron a quedarse. Algunas propiedades en el Delta del Tigre y en la zona portuaria VIP de Rosario así lo demuestran. Nuestro país era un paraíso fiscal y lo aprovecharon. Invirtieron en supermercados y en cadenas de farmacias para poder blanquear sus ganancias. Eso se les complicó cuando dos funcionarios del gobierno peronista que estuvo hasta diciembre de 2015 encabezaron una lucha desigual contra esos poderosos. Por un lado José Sbattella al frente de la UIF y por el otro la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó en sintonía con el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Alejandro Vanoli lograron acotarlos durante una década. Con el retorno del neoliberalismo, se instrumentaron medidas que abrían un panorama equivalente al de Colombia, Chile, Panamá, México y Estados Unidos donde son los dueños y señores del mercado financiero.

Con Macri en el poder se liberalizó la venta de dólares hasta una cifra de u\$s 2 millones mensuales. Hasta esa cantidad no se preguntaba de donde venía el dinero, por lo que era una oportunidad excelente de lavado. Luego de cuatro meses se podía ir del país sin decir adiós. Esto era equivalente a lo que ocurrió durante la dictadura militar con Martínez de Hoz en el Ministerio de Economía y el tándem Domingo Cavallo-Roque Fernández durante el menemato. El dinero era dueño y señor.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendía dólares sin decir basta ni poner precio (porque eso lo marcaba el mercado según ellos). Cuando no le quedaban más pedía un préstamo para darlos a extranjeros o locales poderosos a cambio de pesos circulantes. El que se endeudaba en divisa verde (nuevamente) con el exterior era el Estado. Por eso el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial,

el JP Morgan y hasta los Fondos Buitres estaban dispuestos a dar... dinero a cambio de “algo”.

Alejandra Gil Carbó disponía de un rango vitalicio. Igual que los integrantes de la Corte Suprema, la titular del Ministerio Público tenía ese cargo hasta que se jubilara. Sin embargo, el Ministro de Justicia Germán Garavano, sobre quien hablaremos oportunamente, no solo era un joven soberbio y pedante sino que además buscó (y logró) desplazarla porque había sido la que más había trabajado en contra de los carteles de la droga. Entiéndase los capos y no el mínimo vendedor callejero de “paco” que es al que le gusta pegarle el PRO (porque eso también sube el precio de la droga gracias al riesgo).

Con Federico Sturzenegger al frente del Banco Central (tras haber desplazado por presiones a Vanoli que tenía mandato por carta orgánica hasta 2017) la entidad rectora de la actividad financiera levantó los controles sobre origen y destino de los dineros en cuentas corrientes. Hasta noviembre de 2015 cualquier desplazamiento de fondos que superaran los \$ 30.000 debían ser acompañados por una declaración jurada pertinente con destino a un rastreo eventual. En el macrismo eso se terminó. No solo no se preguntaba nada para comprar y vender dólares sino que además se protegía a los grandes narcoempresarios.

Marcos Peña, Jefe de Gabinete de la Nación (2015-2019) era sospechoso de ser el recaudador de los prostíbulos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri (que era el jefe de todo este armado). Así constaba en las denuncias de Lorena Martins que patrocinó Jorge Bergoglio cuando era el Primado de la Argentina de los católicos romanos contra su propio padre Raúl Martins. De la prostitución organizada al negocio del narcotráfico no hay un paso. Son lo

mismo.

En la Provincia de Buenos Aires el PRO tenía una gobernadora inexperta pero que era parte de este juego. Por eso María Vidal puso en el área de seguridad a un muchacho peligroso. Cristian Ritondo es hijo político de José Luis Manzano, uno de los personajes más siniestros y nefastos de la época menemista. De la nada, el joven médico mendocino se convirtió en millonario y socio del narco Mas Canosa de Miami. Hoy es uno de los magnates de medios de comunicación con el 50 % del *Grupo Uno* (el más grande después del *Grupo Clarín*). Estuvo presente en la jura de su “pollo”. El dirigente de Mataderos fue a Estados Unidos a recibir de la DEA (Drug Enforcement Administration según su sigla en inglés) el nombre del nuevo jefe de la Policía Bonaerense. Y aquí llega Pablo Bresi, quien era presentado como un hombre de acción “experto en narcotráfico”. No hacía falta hacer una investigación en profundidad para ver la relación entre “DEA-Carteles-Policías varias”.

Por lo tanto, la rueda se cerraba sola. Autoridades que daban libertad, una justicia adicta que cubría, medios de comunicación que no veían nada y una policía que garantizaba la calle. ¿Se necesitaba algo más para que Argentina fuera un “narco-paraiso”?

Capítulo 2

Macri y los mercados *offshore*.

La investigación global de ICJ involucra al Presidente Mauricio Macri en una maniobra de lavado en Panamá. La operación llamada “Panamá Papers” incluye a personalidades millonarias de todo el mundo, de los que el mandatario argentino es uno de los principales. El escándalo de corrupción dió la vuelta al mundo y las autoridades del país centroamericano dijeron que colaborarían con la justicia internacional, cosa que no ocurrió porque junto al turismo es la principal razón de ser de una nación escindida de Colombia. Detrás de ese dinero sucio están negocios de contrabando, droga y armamentos.

Mauricio Macri es aún hoy el director de Fleg Trading LTD y nunca la declaró. Su respaldo es que la encargada de la oficina anticorrupción en Argentina era Laura Alonso. Esta funcionaria no solo fue la primera en ocupar ese cargo sin ser abogada sino que además era empleada de Paul Singer, principal dueño de los fondos buitres. En lugar de adoptar un papel de investigación como corresponde al organismo que desactivó salió a justificar al Presidente diciendo que es una práctica común en el mundo empresario. El titular del Poder Ejecutivo durante el régimen jamás declaró a la empresa off shore que

presidió durante once años entre 1998 y 2009.

Las cifras de evasión y dinero en negro que el mandatario argentino tendría en ese paraíso fiscal se conoció gracias al diario alemán *Süddeutsche Zeitung* que en 2015 recibió 11,5 millones de documentos filtrados desde el estudio Mossack Fonseca encargado de las maniobras ilegales. Para poder manejar ese volumen de información el periódico lo compartió con una asociación internacional de periodistas de investigación llamada International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ.

La Casa Rosada intentó justificar la situación diciendo que la empresa Fleg Trading LTD pertenecía a un pool de inversores que también integraba el Grupo SOCOMA perteneciente a su familia y fundada por su padre Franco Macri. Desde los servicios de inteligencia mundiales se sabía algo muy grave sobre Mauricio Macri y se suponía que era la relación con la droga a través de la conexión Avianca que estaría asociándose con su empresa aérea Mc Air.

Macri presidió la empresa de lavado en el eje de paraísos fiscales Panamá-Bahamas aún mientras fue Diputado Nacional y Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en una clara falta legal ya que como funcionario ejecutivo manejaba información sensible e incompatible. Esa omisión abarcaba varias figuras legales que ameritarían incluso el juicio político aún a pesar del fuero que le daba ser primer mandatario. El mayor reaseguro era la protección del Poder Judicial, aliado directo del régimen.

En mayo de 2016 el Diputado Norman Martínez amplió la denuncia contra el Presidente Mauricio Macri en referencia a la docena de empresas fantasma que tenía en mercados offshore

como Panamá, Bahamas y Estados Unidos. Esas compañías se crearon para evadir impuestos o para lavar dinero espurio en una práctica que aparentemente es muy habitual en el empresariado argentino.

Macri tiene una empresa que se llama Fled Trading que se creó para evadir las ganancias que Pago Fácil tenía en Brasil donde se encontraba activa, al contrario de lo que dijo vagamente el ex-Presidente. Intentó deshacerse rápidamente de la misma con una venta apresurada de acciones subvaluadas que se habría recomprando a si mismo por medio de una triangulación en otro paraíso fiscal que la justicia debería haber determinado.

El Diputado Martínez solicitó al fiscal Federico Delgado que citara a declarar al por ese entonces Secretario Legal y Técnico del Poder Ejecutivo Pablo Clusellas quien era titular de un estudio jurídico que interactuaba directamente con Mossack, el estudio panameño centro del escándalo internacional. El rumor reinante era que el fundador del PRO aprovechó la demora intencional en la investigación para volver a esconder su fortuna en el exterior.

La justicia investigó tímidamente las irregularidades en las declaraciones patrimoniales de Mauricio Macri y su esposa Juliana Awada. La fiscal Silvana Russi pidió a la Oficina Anticorrupción que controlaba la ultramacrista Laura Alonso y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las declaraciones de bienes tanto de Mauricio Macri como de Juliana Awada. En el 2015, en las presentaciones en los respectivos lugares hubo \$ 16 millones de diferencia.

Macri fue investigado además por el entramado de empresas ilegales que disponía en Panamá y en Bahamas, hacia donde enviaba su dinero para evadir el control estatal ubicándolo en

corruptos paraísos fiscales en el marco del escándalo internacional. La protección mediática logró que pocos se enterasen de la magnitud de las maniobras dolosas del ex Presidente y su actual esposa. En la búsqueda se encontró la empresa del amigo personal del mandatario Nicolás Caputo, principal favorecido por la obra pública.

Awada no solo tenía incongruencias en las declaraciones de bienes sino que además se sabía que su empresa textil utilizaba talleres en los que se explotaba a trabajadores en su mayoría extranjeros con problemas en la radicación definitiva. Por ello el costo de esa mano de obra era más barata ante el temor de ser deportados de sus trabajadores.

En abril de 2016 se llevaron a cabo dos allanamientos a torres del exclusivo barrio de Puerto Madero en la Ciudad de Buenos Aires que involucrarían al clan Macri. La justicia manejaba una información superior a la difundida por el diario alemán *Süddeutsche Zeitung*. No solo el grupo SOCMA tendrían cerca de 12 empresas fantasmas solo en Panamá (a lo que habría que agregar paraísos fiscales en Bahamas y en Delaware en Estados Unidos) sino que muchísimas operaciones empresarias en Argentina tuvieron su camino hacia los mencionados paraísos fiscales. Algunos medios colegas pudieron acceder a los procedimientos judiciales instrumentados por el Juez Sebastián Casanello.

En esa investigación se tomó documentación de la empresa AON que habría logrado la prestación de los seguros de los ferrocarriles argentinos por contratación directa. Se sospechaba que el propio Presidente Mauricio Macri estuviera favoreciendo a su padre Franco Macri abonando tasas superiores a las de mercado por las primas contratadas.

El padre Franco y los hijos Gianfranco y Mauricio eran los titulares de casi veinte empresas fantasmas destinadas al lavado de dinero o evasión impositiva en alguno de los casos. Doce de ellas se repartían en el binomio Panamá y Bahamas y las restantes estaban en Delaware en un entramado difícil de seguir porque justamente eran empresas creadas para eso. Para evadir cualquier investigación.

Durante el régimen en Casa Rosada tenían la vista puesta en Gran Bretaña, porque si renunciaba el Primer Ministro David Cameron, al que también lo descubrieron con empresas familiares no declaradas sería muy difícil a nivel internacional que Macri hubiera podido seguir en la Presidencia sin al menos un juicio político. La cobertura mediática, el control del Congreso y de la Justicia le daba una impunidad que no se vio ni siquiera en la época de Carlos Menem.

En abril de 2016 dos denuncias por un presunto delito penal sacudieron la tranquila vida del Presidente. Al mismo tiempo que el Diputado Nacional Norman Darío Martínez lo hizo ante la Justicia Federal, el prestigioso Abogado Eduardo Barcesat lo hizo ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). El escándalo de corrupción que la prensa hegemónica en Argentina logró ocultar había tomado dimensión internacional y el mandatario argentino era uno de los más referidos. Por tal efecto la Bolsa de Comercio bajó 3,5 % en una sola rueda el jueves 7 y el Ministro de Hacienda Pratt Gay no encontraba compradores para sus bonos.

La denuncia del Diputado del Frente para la Victoria (FPV) fue tomada por el Juez Sebastián Casanello que no pudo frenar la denuncia por la contundencia de la información. Allegado al oficialista diario *Clarín* (al que protegió en varias causas) el

magistrado derivó la investigación en el Fiscal Federico Delgado, que debía investigar si había posibilidad de una omisión maliciosa para cometer delito en las empresas que Macri y su familia tenían (nueve solo en Panamá). Además, al imputar al dirigente derechista pidió informes a la Unidad de Información Fiscal (UIF), la Inspección General de Justicia (IGJ) y consejo las Facultades de Derechos de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Di Tella. Si la causa lo encontraba culpable del delito mencionado se habilitaba un inicio de juicio político en la Cámara de Diputados de la Nación.

El constitucionalista Eduardo Barcesat se hizo presente en la PROCELAC ante la presunción clara de un delito porque la radicación de una empresa en un paraíso fiscal persigue claramente fines de evasión, elusión o lavado de dinero. Por ello en forma inmediata tendría que haberse iniciado una investigación que deliberadamente omitió la macrista Laura Alonso de la Oficina Anticorrupción (actualmente a sueldo del fondo buitre de Paul Singer a través de la Fundación Vital Voice así como antaño lo fue con Poder Ciudadano).

El prestigioso sitio de noticias argentino *EL VIGÍA* aportó un dato más que interesante en el escándalo internacional de lavado llamado “Panamá Papers”. En el demostraba que el Presidente Mauricio Macri tendría una segunda empresa (en este caso radicada en Panamá) y que aún está activa. La información saltó por una investigación periodística de un diario alemán sobre cuentas offshore, que el primer mandatario nunca la declaró.

En la nota “Mauricio Macri es vicepresidente de otra empresa

en Panamá que aún está activa”² indicaba que el Registro Público de Panamá tenía registrada bajo el número 71446 una empresa llamada Kagemusha S.A. que fue fundada en 1981 y que se agregaría a Fleg Trading Ltd que tomó estado público en un primer momento. En tibias desmentidas desde la Casa Rosada dijeron que la primer empresa que figuraba ya no existía, pero esta revelación ponía al PRO en apuros.

En julio de 2016 la cancillería argentina presentó obstáculos al Juez Federal Sebastián Cassanello para investigar las cuentas que el Presidente Mauricio Macri tiene en el exterior. Los funcionarios que conducía la Ministra de Relaciones Exteriores Susana Malcorra vaticinaron problemas procesales en los exhortos girados a las Islas Bahamas y a Panamá, lugares donde el multimillonario evadió sus capitales sacados del país.

Mientras una ley de blanqueo salió en el Congreso con la complicidad del PRO, la UCR, el “socialismo”, los massistas y los ex peronistas el dueño de SOCMA ganó tiempo inventando historias de un supuesto fondo fiduciario en el que apenas depositó el 40 % de su fortuna en blanco y pudiendo declarar unas quince compañías fantasmas usadas en paraísos fiscales para evadir. El tiempo que se demoró la causa en Argentina y en el exterior fue el principal aliado del ex primer mandatario.

El fiscal Delgado también pidió datos a Uruguay, el paraíso fiscal más cercano, desde donde los Macri en su momento hicieron contrabando de autopartes, causa de la que salieron pagando multas y a jueces.

El Diputado Martínez (FPV) denunció que se habrían borrado

2 <http://agenciaelvigia.com.ar/anoticia00070432.htm>

pruebas que implicaban al Presidente Mauricio Macri por la corrupción de las empresas off-shore que tenía en el exterior. Aparentemente se destruyeron pruebas sobre auto ventas de acciones de la empresa Kagemusha. Pidió en forma urgente al fiscal Federico Delgado que profundizara una investigación que se dilató a propósito.

El Juez Sebastián Casanello ofició exhortos urgentes a Panamá y Bahamas para que informaran si el Presidente se vendió acciones a si mismo con otras empresas fantasmas para disimular la supuesta pérdida de información que busca distraer la investigación. En la denuncia del diputado se declara que desaparecieron pruebas en lo que debería ser un escándalo judicial solo tapado por la protección mediática de la que dispone el PRO.

Además de los datos de Kagemusha se habrían alterado datos de Fled Trading, otra de la docena de empresas que tiene Macri en los paraísos fiscales para poder evadir y lavar dinero. Desde SOCMA intentaron salvar la imagen de su dueño alegando que fue designado como titular del Directorio pero que no era responsable de su operatoria.

A pesar de las presiones que el Gobierno realizó sobre el poder judicial, en noviembre de 2016 avanzaban (muy lentamente) las investigaciones sobre las empresas ilegales que el Presidente Mauricio Macri había mantenido en forma oculta en sus declaraciones. Escudándose en artilugios que le preparó su equipo de asesores decía estar tranquilo y se expresaba como si el tema estuviera cerrado.

“Estoy tranquilo” manifestaba el primer mandatario cada vez que enfrentaba una pregunta en relación al tema. Entrevistadores condescendientes no le repreguntaban sobre por qué ya no se trataba de su tranquilidad sino de una causa

judicial. Mientras tanto su Ministra de Relaciones Exteriores Susana Malcorra frenaba las interacciones judiciales que se debían tramitar desde la Cancillería. Hacia adentro el Ministerio de Justicia conducido por Garavano hacía “sugerencias “para que la causa se mantuviera lenta “hasta que sea olvidada”. En esos mensajes impropios estaba el gran operador judicial del régimen, que era Fabián Rodríguez Simón (alias Pepín).

El fiscal Federico Delgado decía que no lograban obtener información oficial pedida a Brasil, Panamá y República Dominicana, países en los que se movían y mueven las empresas que Macri tiene en los paraísos fiscales. El Juez Sebastián Casanello sentía que sutilmente le estaban frenando los tiempos procesales.

El fiscal citó a los empleados del servicio de Relaciones Exteriores para que explicaran los motivos de la lentitud en los exhortos en el caso de la empresa offshore Fleg Trading, la principal de las 12 que Macri tenía en el exterior.

El blindaje hacia el Jefe de Estado se extendía a los medios de comunicación concentrados, devolviendo de esta manera el libre juego que les permitía la destrucción de la Ley 26.522 de Medios de la Democracia. Cinco grupos mediáticos concentraban el 80 % de las mediciones de audiencia y venta de ejemplares y marcaban la agenda del día, que seguía detenida en buscar cualquier cosa que involucrara a los funcionarios del gobierno anterior.

La investigación quedó paralizada.

En noviembre de 2017 la causa en la que se investigaba el encubrimiento de Franco Macri a su hijo Mauricio estaba

paralizada y seguían creciendo todas las sospechas. El fiscal Federico Delgado y el Juez Sebastián Casanello respondían a la orden de la Corte Suprema de “dormir” cualquier causa que involucrara al Presidente.

Mauricio Macri y su familia armaron una compleja red de empresas offshore con la deliberada intención de esconder dineros obtenidos en forma ilegal gracias a las prebendas que le habían sacado al Estado desde la época de la dictadura militar en Argentina. Además habían incurrido en contrabando ilegal de autopartes y en el vaciamiento del Correo Argentino en sociedad con el Banco Galicia (cuya heredera era la ex-Ministra de Acción Social, Carolina Stanley³).

En Brasil habían quedado encubiertos gracias al pacto de silencio cerrado con el Presidente golpista Michel Temer quien se encargó de limpiar las investigaciones del Lava Jato que llegaban hasta el Jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Argentina, Gustavo Arribas, cobrador del Presidente⁴.

A poco de que el fiscal Delgado le pidiera a Casanello que apurara la investigación sufrió un sospechoso accidente de tránsito que ambos se apuraron en hacer creer que fue casual⁵. Curiosamente la causa se detuvo en seco.

3 S/a. “*Otra de la ministra stanley: contrató empresa de su padre por varios millones*”. Orsai. Visto Mayo 2021.
<https://www.orsai.com.ar/politica/25248-otra-de-la-ministra-stanley--contrato-empresa-de-su-padre-por-varios-millones.html>

4 ECO INFORMATIVO n° 78 en
http://www.ecoinformativo.com.ar/ECODigital_78.pdf

5 **Pescara, Andrés**. “*Sospechoso “accidente” del Fiscal Federal Ariel Delgado*”.
<https://noticias.tvmundus.com.ar/2017/06/09/corrupcion-regimen-sospechoso-accidente-del-fiscal-federal-ariel-delgado/>

La prensa panameña mostró su sorpresa por la falta de repercusión política que había tenido en la Argentina el descubrimiento de empresas ilegales del Presidente Mauricio Macri. Entre otros el prestigioso diario *La Estrella de Panamá* mostraba que el nuestro era el único país en el que a nadie parecía importarle el flagrante hecho de corrupción.

Las empresas offshore están destinadas a evadir dinero de impuestos al fisco y la familia presidencial del régimen tenía cerca de cincuenta en distintos paraísos fiscales. El sospechado dijo que solo “fue un error no incluirlas en sus declaraciones juradas”.

Mientras que en otros países había implicado la renuncia de hasta primeros ministros, en el país sudamericano la poderosa prensa oficialista había bloqueado la gravedad del tema. El Juez Ariel Lijo, de tendencia ultraderechista y ligado a la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires fue quien durmió las investigaciones.

La Oficina del Discurso que en las sombras tenía el macrismo ordenó no hablar del tema, en lo que hacían punta de lanza los multimedios *Clarín*, *La Nación*, *Cadena 3*, *Perfil* e *Infobae*, cómplices del proceso de desguace del Estado supervisado por las oficinas del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Una de las estrategias comunicacionales fue frenar nuevas informaciones centrándose en Fleg Trading y Kagemusha, invisibilizando de esta manera a las casi cincuenta que disponían en los paraísos fiscales. Cuando el colega Horacio Verbitsky denunció en el matutino *Página/12* que el más pobre de los hermanos Macri había blanqueado u\$s 600 millones la pregunta era cuánto tienen el resto de la familia escondido en las cuevas de la corrupción internacional.

*Macri y su familia logran desviar atención
por sus empresas clandestinas.*

En febrero de 2018 el Juez Sebastián Casanello dictaminó que la investigación que se estaba realizando sobre los hermanos Macri por empresas fantasma creadas para evadir dinero pasara al Fuero Penal Económico, lo que garantizaba muchas consecuencias menos en caso de investigarse en serio. La apelación del Fiscal Federico Delgado ante la Sala II de la Cámara Federal no fue aceptada.

Al haber dejado excluido a Mauricio Macri “porque no sabía nada” aunque era el titular de esas compañías, solo quedaron en lista el padre Franco Macri y sus hijos Gianfranco y Mariano. La causa caminaba a paso lento y había comenzado cuando la Fiscalía de Hamburgo notó maniobras sospechosas en Agosto de 2015. El pedido del cierre de una cuenta en el UBS Deutschland para trasladar todo a Suiza en forma limpia sin dejar rastros puso en acción las alarmas del sistema financiero alemán. El banco de destino en Suiza era el Safra Sarasin de Ginebra. Allí irían fondos de la empresa BF Corporation radicada en Panamá que manejaba Santiago Lussich Torrendel asistido por el bufete Mossack Fonseca, especialista en crear empresas ilegales en mercados offshore.

Se habían cumplido tres años y la causa no se movía atendiendo la complicidad del Poder Judicial con el régimen macrista. Casi todo el Gabinete Nacional del macrismo tenía este tipo de compañías utilizadas como herramientas para lavar dinero sucio, hacer elusión fiscal y evasión.

El Juez Federal Sebastián Casanello sobreseyó al Presidente Mauricio Macri en el caso de sus empresas ilegales radicadas

en el exterior para fugar capitales. No se investigó nada y la Cancillería no giró los exhortos que la Justicia había pedido a Bahamas, Uruguay, Panamá y Brasil. Por eso se declaró incompetente y el fiscal Marijuán, también perteneciente al gobierno no apeló el fallo.

Uno de los escándalos de evasión y fuga de capitales que en otros países mereció la renuncia del Primer Ministro de Islandia (Sigmundur Gunnlaugson) y del Ministro de Industria de España (Juan Manuel Soria) en Argentina solo ameritó el silencio de la gran prensa hegemónica y el desconocimiento de la opinión pública.

Tanto el Juez Casanello como el fiscal Marijuán eran aliados del macrismo. El primero cerró sin explicaciones la causa que investigaba el espionaje telefónico a opositores, sindicalistas y familiares ordenado por Macri cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el segundo trabajó persiguiendo al kichnerismo con el fomento del oligopolio de prensa *Clarín*, mientras que en la Copa América de Fútbol de 2016 disputada en Estados Unidos se divirtió con amigos presuntamente con varios gastos pagos.

El macrismo siempre dispuso de una impunidad morbosa que sigue desprestigiando al ya totalmente corrupto Poder Judicial, parte necesaria del retroceso en los Derechos Legales que sufrió la República Argentina desde diciembre de 2015⁶.

6 Maradeo, Julián y Damiani, Ignacio. *Radiografía de la Corrupción PRO*. Buenos Aires. Planeta. 2018

Capítulo 3

La corrupción generalizada en el PRO.

El empresario Nicolás Caputo, testaferro del Presidente argentino Mauricio Macri tendría dos empresas en Estados Unidos que podrían articular con Caputo Construcciones que ha obtenido la mayor cantidad de licitaciones tanto en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde 2007 en adelante como de la Nación desde diciembre de 2015.

Compañero de aula y amigo de la vida, Caputo⁷ y Macri se conocieron en el exclusivo Colegio Cardenal Newman y no solo fue testigo de su casamiento con Juliana Awada sino que además intercambian “préstamos personales” con el Jefe de Estado. Mientras algunos decían que era el verdadero dueño del poder, las mejores fuentes decían que hacía de testaferro del político del PRO.

En Ohio, en Estados Unidos tiene desde 2004 la empresa ANCAP Limited, mientras que en el paraíso de La Florida, en Miami, en el mismo país dispone de una compañía con un nombre híbrido que era MB 2014 LLC fundada el 21 de enero de 2014, fecha cercana a la decisión de Mauricio Macri de lanzarse a la Presidencia de la Nación.

7 Rafele, Esteban y Barral Grigera, Noelia. *El otro yo*. Buenos Aires. Planeta. 2017

Para disimular la gravedad de las empresas offshore del Presidente Mauricio Macri que podría haber terminado con un juicio político, el fiscal Guillermo Marijuán, ligado a la ultraderecha imputó en abril de 2016 sin elementos suficientes a la ex Primera Mandataria Cristina Fernández. Buscaban una detención en el Aeropuerto al estilo de Lázaro Báez. El macrismo quería una foto de la política más importante del presente con las esposas y el casco puesto.

Tras la declaración de Leonardo Fariña, un personaje ambiguo al que le ofrecieron reducir su pena por lavado de dinero si manchaba de alguna forma a alguien del peronismo el fiscal que organizara las marchas por el fiscal judío Alberto Nisman decidió imputar a Fernández en un día sábado, algo poco habitual. Al tiempo que la dirigente se preparaba para declarar en los Tribunales de Comodoro Py por una causa llevada adelante por el también ultraderechista Juez Federal Claudio Bonadío por presuntas maniobras con dólar a futuro (que también alcanzó a Alejandro Vanoli y Axel Kicillof) se lo incluyó en una causa mediática y amanerada fogoneada por la potencia comunicativa del holding *Clarín*.

A menos de dos meses de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2017, la probable participación de la ex Presidenta Cristina Fernández encabezando las listas peronistas de la Provincia de Buenos Aires había puesto definitivamente nerviosa a la Casa Rosada. El derrumbe de la gestión macrista encontró a un Mauricio Macri desesperado e irascible reclamando que detengan a “la yegua” como sea. Incluso poniéndola presa en forma arbitraria como hicieron con Milagro Sala y otros militantes de la Tupac

Amaru desde el comienzo del régimen. Cuando a la salida de la reunión de la conducción del Partido Justicialista Bonaerense su Presidente Fernando Espinoza declaró que los Intendentes de la Tercera Sección Electoral (casi el 50 % del padrón) pidieron expresamente su candidatura las redacciones oficialistas y los jueces del PRO estallaron bajo el grito “hay que pararla”.

En la presentación del Jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña en la Cámara de Diputados el pasado 31 de mayo, el Diputado Nacional Rodolfo Tailhade (del Frente para la Victoria) pasó un audio radiofónico en el que el showman de derecha Jorge Lanata admitía haberle recriminado a Macri no haber puesto presa a Cristina Fernández al principio de la gestión. “Es un imbécil, ahora la mina se viene con todo” expresó el columnista estrella del oligopolio *Clarín*, artífice y sostenedor del macrismo. El peronista se preguntó sobre la supuesta división de poderes que indicaba nuestra Constitución Nacional.

Al respecto se debía tomar en cuenta la revelación del colega Gustavo Sylvestre quien en su programa del 1 de junio del 2017 en Radio 10 denunció que se dio una cena privada en el restaurante “Marcelo” entre el Presidente de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti con el juez macrista Claudio Bonadío a quien a dedo le dieron la reapertura de la causa del suicidado fiscal judío Alberto Nisman. La orden era clara y buscaba detener, incluso con prisión, a Cristina Fernández. No importaba cómo ni con que pruebas, algo que el corrupto Poder Judicial había dejado de lado desde diciembre de 2015 cuando se instaló la impunidad y la venganza de los sectores poderosos contra todos aquellos que habían osado enfrentar el latrocinio de las clases altas. El propio diario *La Nación* tituló en esa

fecha que le dieron la causa a Bonadío “el juez más enfrentado a Cristina Fernández”.

El Gobierno había lanzado a Florencio Randazzo a dividir. Los punteros del PRO en la Provincia de Buenos Aires le decían diciendo a sus votantes que en las PASO detuvieran a Cristina Fernández votando al ex Ministro de Transporte que no quería plegarse a una lista de unidad en el peronismo.

A Macri también le fallaban sus aliados. Sergio Massa y Margarita Stolbizer en el lanzamiento de su alianza solo hablaron de “frenar a Cristina”, pero solo con un programa de televisión por cable los borró de la agenda informativa. Las encuestas de intención de voto le daban a la líder justicialista una cantidad equivalente al PRO y el Frente Renovador sumados aún antes de confirmar su candidatura.

Lo que más preocupaba a Macri y sobre todo a Jaime Durán Barba⁸ era que el peronismo parecía haber aprendido una lección decisiva. Estaban hablándole a la gente de sus cosas. Tarifas, empleo, seguridad, salud, jubilados y educación eran el eje no solo de Fernández sino también de sus Diputados, Senadores e Intendentes. Exceptuando los Gobernadores, que parecían jugar otro juego (mucho más cercano a la Casa Rosada como fue el caso de Juan Schiaretti de Córdoba), estaban en sintonía con el votante. Temas más macro como Venezuela, Mercosur, Fondos Buitres y endeudamiento externo habían quedado para después de las elecciones, porque parecían no ser importantes en la mente de la mayoría de los votantes. Por eso en el macrismo la orden era... hay que meterla presa “como sea”.

8 Jaime Durán Barba fue el gran artífice comunicacional de varios gobiernos de ultraderecha. El de Mauricio Macri en Argentina y el de Guillermo Laso en Ecuador que es su país.

Por ello no era sido casual que tras el apoyo decisivo de los Intendentes de la Tercera Sección Electoral de la Provincia de Buenos Aires, donde incluso estaban los no cristinistas Martín Insaurrealde (Lomas de Zamora) y Osvaldo Granados (Ezeiza) salieran a pegarle desde donde pudieran, pero sobre todas las cosas buscando crear el clima necesario para que la detuvieran. La culpaban de cualquier cosa, que por supuesto no pudieron demostrar en ninguna de esas causas, la embargaron a ella y a sus hijos y aun así no lograron quebrarla. Por el contrario la forzaron a salir a la cancha abandonando el tierno retiro en la localidad santacruceña de Cafayate y Macri no sabía cómo pararla. Por eso dio la orden de detenerla y la mafia judicial se puso en acción. De esa forma buscarían tapar la corrupción innata al PRO.

El Lava Jato salpica a Macri.

El Presidente Mauricio Macri se vio salpicado en forma impensada por el Lava Jato, escándalo que en Brasil provocó la detención de varios empresarios (incluso del gobierno golpista de Michel Temer) ante el pago indiscriminado de coimas por parte de empresarios ligados a las obras públicas. Al tiempo que buscaban una pista en Argentina ligada al gobierno peronista (2003-2015) un consorcio de periodistas “de investigación” de medios derechistas se encontró impensadamente que los dineros sucios llegaban incluso hasta el hombre de máxima confianza de Macri. El argentino Gustavo Arribas, que dirigió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que durmió en el departamento de Juliana Awada en la Avenida Libertador había cobrado una cifra millonaria con un camino que llegaba hasta la Casa Rosada.

El escándalo Odebrecht entró en la Argentina cuando uno de los empresarios arrepentidos en Brasil, Leonardo Meirelles, denunció que le hizo cinco pagos por una cifra total de u\$s 600 mil dólares al “lobista” Arribas para que facilitara gestiones de la multinacional de la construcción en “licitaciones” de obras públicas. El último pago se realizó pocos días después de que el Presidente Mauricio Macri asignara el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento a la empresa IECSA (del propio Macri y conducida por su primo Ignacio Calcaterra) por la nada despreciable cifra de \$ 55.000 millones de pesos en una tarea que haría Odebrecht en *joint venture* con el Grupo Socma (Sociedad Macri).

Los pagos habían comenzado en 2013 por lo que faltaba determinar en qué otras contrataciones se había impuesto la empresa brasileña en la maraña de contrataciones y tercerizaciones que el PRO instrumentó desde que tomó el poder en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el distrito más corrupto y desigual de Argentina. El último de los pagos fue el que desató las sospechas por haberse efectuado pocos días después de la turbia asignación del FF.CC. Sarmiento.

Pablo Cousellas es un amigo del Presidente Macri desde su época en el elitista colegio privado Cardenal Newman, de donde provenían varios integrantes del gobierno durante el régimen. Cuando el ex primer mandatario comenzaba su carrera en la gestión de Boca Juniors le presentó a Gustavo Arribas, un escribano que se dedicaba a transferencias de jugadores en el momento en el que los “representantes” y las triangulaciones de futbolistas se convirtió en uno de los negocios más turbios y rentables de la década de 1990. Fue uno de los intermediarios de pases rutilantes al fútbol brasileño. Por el lado xeneixe Carlos Tévez y Javier Mascherano por River

entre otros.

La confianza creció entre ellos con negocios que aún están por determinarse ya que el Grupo Socma tuvo empresas fantasmas en Brasil con dineros que se fugaban hacia Panamá donde el escándalo denominado “Panamá Papers” lo tenía con casi 54 empresas offshore no declaradas. En ese momento Arribas se radicó en el vecino país y acumuló una millonaria fortuna de dudoso origen.

Cuando el PRO tomó el poder de la Casa Rosada, Macri lo convocó para que se haga cargo nada más y nada menos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desde donde persiguió a los opositores políticos, gremiales, sociales y hasta familiares. Cuando estaba en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2007-2015) su costumbre de invadir intimidades utilizando las herramientas estatales le provocó un pequeño escándalo que terminó con un vergonzoso sobreesimiento el día de su asunción presidencial. En 2015 no quería errores y llamó a Arribas para que se hiciera cargo. Como si fuera un chiste alardeó que lo hizo venir de Brasil con un error en el mensaje ya que lo habría invitado a hacerse cargo de la “AFA” y que recién le dijo la verdad en persona. “Me equivoqué en una letra, era la AFI, no la AFA”. Cuando le preguntaron por qué lo había elegido sabiendo que no era un experto en temas de seguridad alardeó que “era el más vivo de mis amigos”.

Cuando este llegó a Buenos Aires tuvo un claro gesto “mafioso”. Lo alojó en su propio departamento de la Avenida del Libertador al 300 en la CABA. Que usara la cama, el baño y la cocina del matrimonio Macri-Juliana Awada (momentáneamente radicados en la Quinta Presidencial de Olivos) era un gesto muy visible para el entorno. Era SU hombre de confianza que además disponía de todo el aparato

estatal de inteligencia. Si la declaración patrimonial no mentía (y cuando esto se hace se lo hace en sentido contrario) tenía un patrimonio de \$ 46.136.661 de pesos. Tranquilamente podría alquilar o comprar una vivienda por sus medios, pero lo que valía en esta acción era el gesto de ser la mano derecha del Presidente ultraderechista.

Cuando estalló el escándalo de las coimas que Odebrecht habría girado hacia la Argentina, Mauricio Macri salió justificando que las transferencias (de la que solo reconocen u\$s 70.000 dólares) eran por la venta de un inmueble. En la conferencia de prensa solo dijo “no entiendo cuál es la duda, no sé, cuando ‘el brasilero’ (dixit) vuelva va a mostrar los papeles y todo listo”. En otros párrafos veremos que esos papeles no eran de un inmueble sino “de muebles” en una burda cacofonía que tomaba por estúpidos a todos los integrantes de la Comisión Bicameral que lo interrogó.

La causa judicial.

Tras una denuncia que recayó en el Juzgado del Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral el fiscal Federico Delgado comenzó a buscar datos, consultando incluso al periodista Hugo Alconada Moon del diario *La Nación* y muy ligado a los servicios de inteligencia norteamericanos (según confesó en una charla en una universidad privada en 2016) que fue quien dio a conocer los datos brindados por el consorcio de investigación periodístico *IDL Reporteros* de Perú. Allí se supo que Arribas había recibido cinco transferencias documentadas en el escándalo brasileño llamado Lava Jato (nombre que responde al del lavadero de autos de Alberto Youssef, jefe del arrepentido Leonardo Meirelles que delató las maniobras).

En septiembre del 2013 Arribas recibió los depósitos en su cuenta en el Banco Credit Suisse en la sucursal en Zurich provenientes de un giro que partía de la empresa RFY Import & Export Limited, una de las empresas offshore disponibles para este tipo de delitos económico-fiscales. De esos pagos el Jefe de la Inteligencia argentina solo admitió uno por u\$s 70.500.-. Desde el PRO dijeron que era por la venta de un inmueble, aunque la versión se desarmaba por dos simples razones que consistían en que no había escrituras que respaldaran la operación en un país en el que las ventas de propiedades solo se hacen en Reales y nunca en dólares.

Cuando a la original denuncia se le agregó el 12 de febrero de 2017 otra realizada por los Diputados Nacional peronistas Héctor Recalde, Teresa García, Martín Doñate, María Emilia Soria y Rodolfo Tailhade se activó la investigación que el Juez en lo Criminal y Correccional Sebastián Casanello le encargó al fiscal Franco Ricardi. Lo primero que hicieron fue girar un exhorto intentando determinar la razón social y actividades de RFY.

El escándalo tomó un importante vuelo y el Diputado oficialista Fernando Sánchez (de Coalición Cívica) pidió formalmente que Arribas suspendiera sus vacaciones de un mes (en Brasil) y retornara a explicar formalmente qué era lo que se estaba conociendo a través de las filtraciones de prensa. Como la causa original estaba en manos de Canicoba Corral y este estaba en plena feria judicial los trámites recayeron en el doctor Sergio Torres que actuaba como subrogante. Generalmente en estas situaciones no hay mayor avance y este caso no fue una excepción.

Mientras Arribas se encontraba en Brasil se produjo la sospechosa muerte del Juez Teori Zavascki, integrante del

Supremo Tribunal Federal de ese país. En un vuelo entre San Pablo y Río de Janeiro su avión cayó sospechosamente al agua pereciendo en el acto. Era el magistrado que más había impulsado el Lava Jato que tenía ramificaciones incluso en el resto de América Latina.

El 2 de febrero de 2017 Gustavo Arribas declaró en secreto ante la Comisión Bicameral de Seguridad. Allí, poco menos que se burló de los legisladores cuando dijo que los u\$s 70.495 que había cobrado en las cuentas denunciadas eran por “muebles” y no un “inmueble”. A la primera persona que dejaba en ridículo era directamente a su Jefe, el Presidente Mauricio Macri quien había dado la primera versión de que era un cobro por una propiedad. A los Diputados y Senadores les dijo que esos muebles pertenecían al departamento en el que había nacido su hija aunque nunca especificó en qué lugar de San Pablo se ubicaba. Para esa reunión de máxima importancia no llevó un solo papel. En todos los casos apeló a su memoria como si se tratara de una charla informal. En una sala contigua del sexto piso del anexo aguardaba (celular en mano) su adjunta, Silvia Majdalani la misma que Elisa Carrió siempre quiso desplazar para poner a una persona de su riñón.

De la Comisión Bicameral no se podía esperar preguntas inteligentes ya que estaba controlada por la ultraderecha oficialista. La misma la integraban los Senadores radicales Juan Carlos Marino y Oscar Castillo y el peronista de derecha Roberto Basualdo junto a los Diputados Miguel Bazza (de la UCR), Marcela Passo (Frente Renovador, aliado al PRO) y los peronistas auténticos Juliana Di Tulio y Teresa García (del Frente para la Victoria).

Cuando lo notaron nervioso pidió disculpas porque dijo que

“no venía de la política” a pesar de que manejaba información reservada de todos los opositores gracias a disponer de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que conducía. De esa forma buscó escabullirse de la acusación directa de Leonardo Meirelles en Brasil, el comisionista arrepentido de Odebrecht. Aunque el fiscal Federico Delgado pidió un exhorto para tomarle declaraciones la canciller Susana Malcorra se encargó de detener el pedido interjudicial que debía atravesar la vía diplomática. Mientras duró la feria el Juez Ariel Lijo (asiduo visitante de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires) durmió la causa que tenía Canicoba Corral.

Arribas dijo desconocer la documentación disponible que indicaba que tenía una cuenta en un banco de Zurich a su nombre, donde recibió una transferencia proveniente desde el Standard Chatered Bank de Hong Kong a nombre de RFY Import & Export Limited, nombre de fantasía con el que la empresa Odebrecht tercerizó las coimas. El último movimiento fue posterior al otorgamiento que Mauricio Macri hizo del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento otorgado en forma conjunta a IECSA (de Macri a cargo de su primo y testaferro Ignacio Calcaterra) y la italiana Ghella Societá per Azioni (ligada a sectores masónicos italianos a los que pertenecerían la familia del Presidente argentino).

El apresurado viaje de Macri a Brasil.

El 6 de febrero de 2017 Mauricio Macri viajó a Brasil para entrevistarse con el Presidente golpista Michelle Temer a quien le reclamó impunidad ya que el Juez Federal Canicoba Corral pidió exhortos por el caso de Arribas. Mientras que buscaba la complicidad del mandatario de facto ordenó a su Ministra de

Relaciones Exteriores Susana Malcorra que “durmiera” los pedidos que por protocolo tenían que pasar por esa vía. Por el mismo caso el juez envió exhortos también a Suiza que al igual que en el caso brasileño fueron detenidos en el Palacio San Martín. El magistrado argentino rechazó inexplicablemente la posibilidad de que el arrepentido Leandro Meirelles declarara por videoconferencia. Lo que reclamaba era el detalle de las cuentas de Gustavo Arribas en ese país donde tenía el 80 % de su sorprendente fortuna de \$ 120 millones de pesos.

Al mismo tiempo los Ministerios Públicos del continente tuvieron una reunión para coordinar las búsquedas del caso Odebrecht que abarcaba a todo el continente salpicando a casi todos los gobiernos (fundamentalmente los neoliberales) con coimas que usaban como práctica recurrente para “aceitar” las licitaciones que se encargaban de ganar.

La colega Irina Hauser, especialista en temas judiciales del matutino *Página/12*, citando Hugo Alconada Moon de *La Nación* llegaba a la conclusión de que todo era por el lobby del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento (obra de \$ 55.000 millones de pesos que se adjudicó IECSA del propio Presidente Macri en sociedad con la brasileña Odebrecht). Todo comenzó con las investigaciones del Lava Jato (megacausa que comprometía a los políticos y empresarios brasileños).

En marzo de 2017, Canicoba Corral terminó sobreseyendo a Arribas en base solamente a informes de la Unidad de Investigación Fiscal (UIF) y la opinión de un subgerente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que con mano de hierro controlaba el ultramacrista Federico Sturzenegger. Llamó la atención el rápido cierre de la causa que investigaba a la mano derecha de Macri y Jefe de los servicios de inteligencia.

Un cambista arrepentido (Leandro Meirelles) comenzó a confesar que su jefe Youssef pagaba coimas triangulando. Se realizaron entre 3.000 y 3.500 operaciones entre 2009 y 2014 por cifras cercanas a u\$s 240 millones de dólares usando cuentas desde Hong Kong hasta Panamá pasando por Argentina. El lavadero del jefe prestanombre (“Lava Jato”) le dio nombre al más sonado escándalo empresario en los últimos cincuenta años en América Latina, equivalente al “Mani pulite” de Italia.

Alianza entre la droga y el PRO.

Nuestro país comenzó a ser un festival de la droga en los 90. Con las políticas neoliberales de Carlos Menem grandes franjas de la población fueron desplazadas hacia los márgenes que llevó a miles al consumo y distribución de narcóticos. Además el combo cerraba con un país que se había convertido en un paraíso fiscal.

Con el macrismo en el poder Argentina volvió a ser un espacio propicio para el lavado de dinero de cualquier origen espurio. A ello agreguémosle que las “familias” se han radicado en un país amable y avanzado. Muchos de los barrios cerrados se convirtieron en refugios narcos. El símbolo más reluciente es la zona del Partido de Tigre donde los vecinos deformaron el nombre comercial de un complejo urbanístico al que llaman “narcodelta”.

En la Ciudad de Buenos Aires, incluso con el apoyo del ahora Papa Francisco (que en ese momento era el Obispo Primado de Argentina, Jorge Bergoglio) Lorena Martins denunció una red de droga y trata de mujeres con destino de explotación sexual

que involucraba a su propio padre Raúl Martins. La punta del ovillo terminaba en una recaudación que alimentaba las arcas del PRO. Quien recaudaba la caja era Marcos Peña, el Jefe de Gabinete macrista. La cantidad de prostíbulos y tráfico de droga aumentó en forma pronunciada en la capital rioplatense y para ello cumplió un rol esencial de protección, cobertura y domesticación la Policía Metropolitana de Mauricio Macri, formada en su mayoría con personal expulsado de la Policía Federal Argentina (PFA).

Acusan de malversación de fondos a María Vidal.

En abril de 2019 denunciaron a la Gobernadora María Vidal por malversación de fondos públicos, ante gastos injustificados para uso personal. Violando la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que sostiene que el mandatario y vice deben residir en La Plata, la macrista viajaba todos los días en helicóptero hasta la Base Aérea de Morón, donde se refugiaba lejos de la gente.

Según la denuncia de Sergio Poggi, acompañado por el abogado Leonardo Martínez Herrero, se explayaron sobre gastos (que oportunamente en 2016 y 2017 también denunciara *TV Mundus*) de movilidad diaria en helicóptero entre La Plata y Morón. Eso implicaba u\$s 1.700.000 de dólares anuales, equivalente a \$ 85.000.000 de pesos (a la cotización de \$ 45 por 1 u\$s de ese momento), sin contar el exceso de movimiento de personal de seguridad que ello implicaba.

En la Base Aérea de Morón las reformas (los bonaerenses pagaron \$ 660.000 pesos para la nueva casa de Vidal en la Base

Aérea de Morón en diciembre de 2015⁹.

La Constitución de la Provincia dice que los integrantes del Poder Ejecutivo deben vivir en La Plata y ello no se cumplió. María Vidal vivió en Morón y su vice Daniel Salvador en San Fernando.

Estafa electoral. La justicia encubrió a María Vidal.

La Justicia protegió a María Vidal en el caso por estafa electoral trasladando su causa de un Juzgado Federal a otro de carácter eleccionario controlado por el régimen. El magistrado Sebastián Casanello fue desplazado de las investigaciones en las que la Gobernadora habría lavado dinero de dudoso origen para financiar sus campañas de 2015 y 2017. La contundente prueba presentada por los colegas de *El Destape* fue ignorada y subestimada.

El periodista Juan Amorín tuvo el gran hallazgo de ver que los aportantes declarados por el PRO eran erróneos. Para ello utilizaron los nombres de personas que jamás se habían enterado de que figuraban como cómplices del régimen. No solo los hicieron pasar como benefactores sino que además los afiliaron al partido de ultraderecha que fundó Macri.

El camarista Martín Irurzun recibió órdenes de la Casa Rosada de cubrir a Vidal. El encargado de transmitir la voluntad del Presidente Macri fue su abogado Fabián Rodríguez Simón, alias “Pepín”. El sitio web *El Cohete a la Luna* develó un documento fotográfico que mostraba el estrecho vínculo entre el PRO y el responsable de que a causa pasara ahora a Adolfo

9 <https://noticias.tvmundus.com.ar/2016/05/01/buenos-aires-regimen-los-bonaerense-pagan-660-000-para-la-nueva-casa-de-vidal-en-la-base-aerea-de-moron/>

Gabino Ziulu de tendencia macrista.

En febrero de 2018, para cubrir la estafa de María Vidal, el Juez de Cámara Irurzun le sacó la causa del lavado de dinero de falsos aportantes al Juez Sebastián Casanello que estaba avanzando a pie firme y se lo dio al Juez Ariel Lijo. De esta manera, la investigación quedó paralizada protegiendo a la Gobernadora ultraderechista. La impunidad era la principal característica de la alianza entre el régimen macrista y la masonería de los Tribunales de Comodoro Py.

Las investigaciones del periodista Juan Amorín del sitio colega *El Destape Web* se fueron diluyendo en tribunales con desvíos provocados entre otros por el fiscal macrista Carlos Stornelli (hombre del PRO del riñón de Macri) que llevó la causa a La Plata como si los aportantes falsos fueran apenas un problema electoral. El Juez Casanello estaba conectando empresas aportantes (ligadas a Macri) favorecidas por la Casa Rosada en contrataciones corruptas y el Juez de Cámara Irurzun le sacó la causa con excusas increíbles. La investigación se durmió repartida en jueces ligados al régimen, permitiéndole a María Vidal presentarse cómodamente como impoluta.

El régimen macrista alteró la documentación que demostraba las maniobras irregulares de María Vidal en el lavado de dinero descubierto el sitio colega conducido por Roberto Navarro. Los listados originales mostraban cómo ponían como aportantes a personas que disponían de planes sociales y eran en su mayoría desocupados que no estaban ni enterados de haber sido utilizados en la maniobra.

Cuando el Juez Federal del Juzgado n° 3 de La Plata, el Dr. Ernesto Kreplak, comenzó a avanzar en la investigación que inculpaba por lavado de dinero a la Gobernadora, los

Senadores Esteban Bullrich y Gladys González junto a la Diputada Graciela Ocaña desde el Gobierno Nacional comenzaron a hacer una alteración de documentos que derivó en el reemplazo de los listados.

Como si la primera ponencia no hubiera ocurrido, presentaron nuevos papeles y la Cámara dispuso el traslado hacia el Tribunal Electoral donde lo tomó el Juez Adolfo Gabino Ziulu, afín al régimen macrista.

Mientras tanto, María Vidal no explicó por qué desplazó preventivamente a María Fernanda Inza, a quien quería poner al mando del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires, el segundo mayor presupuesto detrás del botín de la Nación. Este caso de corrupción, al igual de los cientos que se descubrieron en los últimos años quedó encubierto en la complicidad judicial.

En agosto de 2018 la Cámara Nacional Electoral (CNE) no aprobó el balance del PRO en la Provincia de Buenos Aires donde los macristas lavaron más de \$ 80 millones de origen dudoso.

La CNE le indicó al Juez Federal Adolfo Ziulu que no aprobara la documentación que escribió el PRO-Cambiamos para justificar los gastos de campaña de 2017. No se manifestó respecto a la de 2015 que también tenía serias irregularidades. Al igual que en Entre Ríos, donde el narcotráfico sostuvo al Intendente de Paraná del PRO, se suponía que la delincuencia organizada y el sistema de corrupción empresaria sostenían al régimen.

En julio de 2019 la Gobernadora María Vidal hizo una puesta en escena para disimular su responsabilidad en el lavado de

dinero que se usó para la campaña electoral de 2017. Queriendo disimular su participación en lo que ya era un escándalo de corrupción que la mostraba de cuerpo entero pidió la renuncia de la encargada de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires, Fernanda Inza, de su extrema confianza, al tiempo que le ratificó su confianza personal. Seguramente la usaron de “cabeza de turco”, cubriendo como indicó Cúneo al Jefe de Gabinete provincial Federico Salvai, esposo de Carolina Stanley, Ministra de Acción Social. Además implicó al Intendente de Vicente López Jorge Macri que también presentó graves irregularidades en su enriquecimiento personal.

Un narco aportó para la campaña de María Vidal.

El sitio *EL Destape* siguió avanzando en la investigación del lavado de dinero de la campaña electoral de 2017 de Cambiemos. El periodista Juan Amorín descubrió que un narcotraficante dispuso dinero para las candidaturas de Esteban Bullrich y Graciela Ocaña que guiaba María Vidal. Fernando Gastón Fa Acuña, decía *El Destape*, fue detenido en Bahía Blanca en 2012 con 4 kilos de cocaína. A pesar de esa causa fue presidente de la Juventud del PRO, el partido macrista que estaba en el poder desde 2015. Su filiación al macrismo se ratificó con su candidatura en dos oportunidades a consejero escolar en esa ciudad.

En plena emisión a través de la plataforma de *YouTube*, el entorno de María Vidal amenazó al programa *El Destape TV* por difundir la corrupta red con la que el PRO se “financió” en la campaña electoral del 2017. Juan Amorín, que integraba el equipo que conducía Roberto Navarro descubrió hace un poco

más de un mes que los aportantes a las candidaturas de Esteban Bullrich y Graciela Ocaña no estaban ni enterados. El conductor denunció al aire que estaba siendo amenazado por un vocero de la Gobernadora.

Amorín rastreó la lista de los “aportantes” al partido del régimen y con gran sorpresa descubrió un par de centenares de personas que jamás se enteraron que estaban usando sus nombres. En la mayoría de los casos eran beneficiarios de algún plan social (o bien ex beneficiarios) y en muchos de ellos radicados en Partidos de la Provincia de Buenos Aires con Intendentes ultraderechistas.

Varios de ellos no solo que fueron utilizados como falsos aportantes sino que además, sin saberlo, figuraban como afiliados al PRO. Cuando con las cámaras del medio colega fueron a la sede nacional del partido oficialista no les dieron ningún dato. Lo confirmaron concurriendo a la Cámara Nacional Electoral. Los casos testigos pertenecían al Partido de Quilmes, en el sur del conurbano, que tenía como jefe comunal a Martiniano “Casancrem” Molina. El caso de corrupción, en un país con justicia normal, obligaría a la intervención de la organización partidaria. Por nada, en cambio, había sido intervenido el Partido Justicialista, que la Jueza María Servini de Cubría entregó a los macristas Luis Barrionuevo y Julio Bárbaro.

La red social de micro-mensajes *Twitter* suspendió en forma arbitraria la cuenta de *El Destape*. La empresa se había convertido en líder de audiencia a raíz de la investigación que estaba realizando sobre la estafa electoral de la Gobernadora Vidal.

La macrista instrumentó un sistema de aportantes falsos para

disimular la plata sucia con la que sostuvo la campaña electoral de 2017 en la que los candidatos Esteban Bullrich (Senador) y Graciela Ocaña (Diputada, sospechada de enriquecimiento ilícito) derrotaron por escaso margen a Unidad Ciudadana (peronismo). En el marco de un avance indetenible, el régimen buscaba silenciar como fuera lo que es un escándalo de corrupción que estaría llegando incluso a la campaña de 2015. Nada casualmente una red social controlada por el Departamento de Estado de Estados Unidos bloqueaba el perfil de los colegas.

Increíble resarcimiento a las empresas de Gas.

La mafia del gas demostró cómo la mafia macrista era capaz de engañar a una población completa con todo su sistema de medios como cómplice y una sociedad que había comprado la “cajita china” del resarcimiento. Todos los habitantes de la República Argentina volvieron a tener un tarifazo de entre el 35 al 50 % en el gas, al tiempo que les pagó otros \$ 10.000 millones de pesos para repartir entre sus dueños. Mientras que el ciudadano de a pie mal informado creía que no pagaría (como si el Estado no fuera de él) no registró que desde octubre de 2018 el gas costaba un 50 % más.

Durante quince días el Secretario de Energía Javier Iguacel dijo muy suelto de cuerpo que el Decreto presidencial que disponía pagar retroactivamente la variación de la divisa norteamericana entre abril y octubre sería abonado en 24 cuotas con intereses por cada usuario desde enero de 2019. En forma retroactiva, había que pagarles entre todos \$ 8.000 millones de pesos con intereses a las empresas distribuidoras y comercializadoras la variación cambiaria de un elemento (el

gas) que se obtiene en la Argentina y que se extraía con personal y material también argentino, por lo que no se entendía por qué debería ser en dólares como dispuso el régimen.

El escándalo trascendió la distracción habitual que lograban imponer los medios de comunicación dominantes, que eran cercanos al régimen. Por eso se les prendieron todas las luces de alarma cuando la primera que presentó un proyecto para detenerlo fue la Senadora Cristina Fernández. Dos horas después de haber afirmado por radio que se mantendría el aumento y el pago resarcitorio (que son dos cosas distintas) “porque hay que aprender que hay que pagar”, el propio Mauricio Macri dijo que lo iba a pagar el Estado. Y ahí empezaba la cajita china.

Una cajita china es algo que distrae. Uno mira para otro lado. Las voces de la calle respiraban aliviadas que no íbamos a tener que pagar ese resarcitorio por la devaluación del dólar en un país con un producto en pesos y....todos felices. Pero por otro lado, nadie había prestado atención a que desde octubre de 2018 se pagaba un 35 a 50 % más, ya que eso iba por otro lado.

Desde la Secretaría de Energía (ex Ministerio) aumentaron “mágicamente” esa cifra resarcitoria de \$ 8.000 a \$ 20.000 millones. (¡!) Para completar el engaño, anunciaron que “atendiendo el compromiso de las empresas con la sociedad, habían decidido condonar (¿?) el 50 % de esa cifra”. Es decir que en lugar de la cifra inicial, cobrarían \$ 2.000 millones más. Y lo peor es que también lo pagaban todos ya que el Estado son todos. Esa cifra que un grupito de empresarios, que después la esconden en mercado offshore (como hacen todos los integrantes del Gobierno) cobrarán es la que le faltará a la

educación, la salud y la vivienda por ejemplo.

Stolbizer, aliada de Macri, intenta despegarse del Vidalgate.

En 2019 los aliados al régimen macrista empezaban a enajenarse del monstruo que habían generado. Margarita Stolbizer, aliada de Mauricio Macri, quería despegarse del lavado de dinero que María Vidal hizo en la campaña electoral de 2017. Para recuperar un poco de espacio mediático, la ex Diputada macrista que encabezaba la agrupación del GEN se presentó con información ante el Juez Sebastián Casanello.

La dirigente derechista quería la figura de “amicus curiae” (amiga del Juez) en la causa en la que se investigaba el lavado de dinero que Vidal había hecho en la campaña del PRO en 2017. Aparentemente la misma maniobra fraudulenta se había hecho en la campaña electoral de 2015 que llevó a la integrante de la secta católica Opus Dei a la Gobernación bonaerense.

En la presentación espontánea dijo disponer de casi 150 nuevos hallazgos comprobados que en algunos casos involucrarían a personas de su agrupación antiperonista. Stolbizer estuvo apoyada por el multimedio de la oligarquía *Clarín* cada vez que acusaba de cualquier cosa a la ex Presidenta Cristina Fernández. Aparentemente se había roto ese encanto que hasta un año antes había entre esos conservadores. Cuando presentó el libro “Yo acuso” lo hizo junto a Macri.

El Intendente PRO de Vicente López, Jorge Macri, también tenía empresas offshore.

El Intendente del Partido de Vicente López, Jorge Macri, quien había rechazado ser Jefe de Gabinete de la Provincia porque él

necesitaba como mínimo \$ 80.000 mensuales (antes de la inflación) resultó ser el Secretario de una empresa offshore en el paraíso panameño y Manager en otra radicada en Miami. El primo del Presidente Mauricio Macri siguió el camino de su familia.

La empresa Artecity N204 fue creada el mismo año que Jorge Macri asumió como Intendente. En Miami, figuraba como manager de la empresa Artecity N 204 SRL en una tarea simultánea con la conducción del municipio de la zona norte del conurbano bonaerense. La misma está activa desde 2011, cuando recién asumía por primera vez la gestión comunal.

En Panamá, era el Secretario de Latium Investments Inc, que presidía Carlos Libendinsky, dirigente y favorecedor del PRO. Aunque esta empresa se fundó en el 2004, sigue activa.

La pregunta que todos se hacían era si los ingresos del Intendente de Vicente López solo se nutrían de las arcas municipales o seguía sosteniendo estas actividades privadas paralelas en paraísos fiscales que hacían sospechar de su honestidad en las contrataciones de servicios o proveedores.

Jorge Macri, estaba siendo cuestionado por contratos dudosos establecidos con un empresario integrante del cartel de la droga Los Ureños. Con una empresa de luminarias públicas fantasma estaría financiando a Carlos Yorelmy Duarte Díaz prófugo desde 2015.

El Municipio que conducía el primo del Presidente Mauricio Macri habría contratado con la empresa ITC del empresario colombiano que permanece en la clandestinidad escapando de la justicia en la causa Narco-Arroz. A pesar de ese dato Jorge Macri lo contrató en reiteradas ocasiones¹⁰.

10 “Jorge Macri no será investigado por propiedad ilegal en Miami”.

El primo directo del Presidente Mauricio Macri no fue investigado por la adquisición sospechosa de una exclusiva propiedad en Miami. Jorge Macri habría estado involucrado con una maniobra de dinero que no lograba explicar pero que el poder judicial macrista había decidido no investigar.

La Cámara Federal de San Martín revocó y retó a la Jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado (ex esposa del fiscal Alberto Nisman que se suicidó en 2015) por haberle dictado un embargo de ocho millones ante la adquisición de un departamento en Miami que no pudo justificar.

El Intendente y su esposa Florencia Nardi no demostraron de dónde sacaron u\$s 405.000 dólares para comprar un exclusivo piso en esa localidad norteamericana en la que se mueven dineros sucios de la mafia internacional. El caso se cerró en el marco de la impunidad de la que gozaba el régimen desconociendo la causa iniciada por la Procuraduría contra el lavado de activos (PROCELAC).

El Intendente PRO de Lanús tenía una cuenta en paraísos fiscales.

Néstor Grindetti fue el sorpresivo Intendente del Partido de Lanús en el conurbano bonaerense. Durante las dos gestiones del Presidente Mauricio Macri al frente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue quien manejó la caja y se estableció como la mano derecha del fundador del PRO. En forma incompatible con su ejercicio de la función pública creó

<https://noticias.tvmundus.com.ar/2017/11/06/panama-papers-regimen-jorge-macri-no-sera-investigado-por-propiedad-ilegal-en-miami/>

una empresa fantasma en Panamá y era uno de los principales nombres que aparecieron en la investigación del diario alemán *Süddeutsche Zeitung*.

Al mismo tiempo que era Ministro de Hacienda de la CABA fundó la empresa Mercier International de la cual era el Presidente, operando en triangulación contra el banco suizo Clariden Leu AG sin que el dinero pasara por Argentina. La inscripción en los registros panameños indicaba que la compañía estaba habilitada para comprar bonos y títulos y emitía sus acciones al portador, permitiendo que sus dueños fueran anónimos.

La empresa no estaba declarada por el Intendente y se temía que entre sus operaciones hubiera adquirido títulos de deuda externa en default conectada a los fondos buitres con los que la Argentina había perdido en una forma humillante.

En mayo de 2016, mientras toda la prensa cubría la multitudinaria marcha de las cuatro centrales de trabajadores que hicieron su primer acto conjunto, en el Municipio de Lanús, en la Provincia de Buenos Aires, el Intendente Néstor Grindetti ordenó a los matones del PRO que dispersaran a los vecinos que pedían explicaciones. El Jefe comunal usó dinero público para irse de descanso a un SPA con otros integrantes de su gabinete, al tiempo que Interpol pidió su captura por maniobras sospechosas cuando era el encargado de las finanzas de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri época desde la que tendría empresas offshore.

Ante la cantidad de denuncias que pesaban en su contra, el Frente para la Victoria preparó un pedido de interpelación formal en el recinto del Consejo Deliberante, pero Grindetti quiso sorprenderlos y se presentó en forma espontánea. En solo

35 minutos dijo haber contestado no menos de una veintena de preguntas. Su técnica fue negar todo respecto a los Panamá Papers y su presunta participación en la estafa de los Bonos Tango que emitiera la CABA. Cuando se llegó al punto de si el municipio había pagado un “retiro” de descanso, un concejal del PRO dijo que Lanús solo había pedido cotización pero que el pago lo hizo el Intendente de su propio bolsillo.

Mientras declaraba se juntaron un centenar de vecinos, empleados y periodistas que deseaban saber qué estaba declarando. Pidieron que la sesión fuera pública y quisieron entrar. La respuesta fue desmedida no solo por la acción de los uniformados policiales sino que en forma inmediata se hizo presente un grupo de barrabravas del Club Atlético Lanús que comenzó a pegarle a los presentes. También hicieron algunos disparos al aire. No hubo heridos.

En ese momento, ante el clamor popular en la calle el Jefe Comunal se fue raudamente sin dar explicaciones. “Ni siquiera saludó”, dijo uno de los presentes. Grindetti se mostraba cada vez menos en público. Se escondía en el Palacio Municipal de la calle Hipólito Yrigoyen y solo se movía con custodia a locales cerrados. Seguía el mismo camino que su colega Martiniano “Casancrem” Molina (del Municipio de Quilmes) y la propia Gobernadora María Vidal que se fue a vivir a una base aérea para estar lejos de la gente común.

Avruj, del PRO, también tenía una empresa fantasma.

El escándalo internacional de empresas fantasma con fines ilícitos radicadas en el exterior se extendió como un reguero de pólvora entre los funcionarios del PRO. El Secretario de Derechos Humanos de la Nación Claudio Avruj, integrante de

la comunidad judía tenía una de estas compañías en Panamá que había sido descubierta por el escándalo internacional develado por el diario alemán *Süddeutsche Zeitung*.

Con la ayuda del Estudio Mossack Fonseca Avruj fundó la empresa Kalushy en la que era socio de su esposa Elsa Virginia Alfie a quien le transfirió la titularidad en un momento en que empezaron a investigarlo en los escándalos que Rubén Beraja, banquero judío, había tenido con la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).

Además, cabe recordar que quien se encargó de enfriar el tema de los Derechos Humanos durante el régimen tenía una agencia de noticias de la colectividad que financiaba con publicidad oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. *Vis a Vis* era la pantalla local desde la que triangularía con los paraísos fiscales que le habían descubierto.

Gerónimo alias “Momo” Venegas tenía una empresa en Estados Unidos.

El sindicalista macrista Gerónimo alias “Momo” Venegas (fallecido en 2017) tenía una empresa en Estados Unidos que llevaba su nombre. El Secretario General de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE), aliado a Mauricio Macri, era titular de Gerónimo Venegas Corp. El hallazgo era parte de los papeles encontrados en la investigación denominada Panamá Papers que salpicó a empresarios y al propio primer mandatario argentino.

El sindicalista de ultraderecha creó esa empresa en Estados Unidos en Octubre de 2013, pocos días después de la elección parlamentaria en la que el Frente para la Victoria perdiera en la Provincia de Buenos Aires contra el Frente Renovador de

Sergio Massa (que Venegas apoyó). Luego migró hacia el PRO, el otro partido de la derecha que en 2015 llevó a Macri a la presidencia. Dentro de esa campaña fue el impulsor de la estatua de homenaje a Juan Domingo Perón en la Capital Federal. Siempre estuvo a favor de las patronales agroexportadoras de la Mesa de Enlace (Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO; CARBAP y Federación Agraria Argentina) y fue cómplice del trabajo esclavizado en el campo. En esos días dijo que casi no hubo despidos en el régimen macrista y que los echados eran porque “sobraban y eran vagos”.

Aunque figuraba inactiva, ello no significaba que no pudiera operar en el momento en que lo creyera necesario. Pudo haberse usado además para abrir cuentas bancarias en Florida, lugar de radicación. Con el número de Compañía P13000089142 estaba radicada en el 407 de Lincoln RD, Miami Beach, Florida. Venegas era el Presidente y la agente era Tatiana Correcha. Estas no son necesariamente eran sus oficinas pero sí la de su representante en Estados Unidos.

Epílogo

A pesar del escándalo que su Gobierno intentó disimular el Presidente Mauricio Macri sigue teniendo empresas offshore en Panamá, donde tendría escondida parte de su fortuna personal de dudoso origen. El registro público de esa República centroamericana bloqueó el link www.registro-publico.gob.pa/consultasweb/api/index.php/ObtenerFolio/1128439/1 en el que constaban los datos de la empresa KAGEMUSHA S.A. De todas formas la base de datos www.opencorporates.com indica que la misma sigue activa. El FBI bloqueó al acceso público la búsqueda en su sitio www.archive.org. Más allá de la cobertura todo sigue igual.

En pleno escándalo de los Panamá Papers que un consorcio de periodistas dio a conocer el macrismo en pleno salió a desmentir que las empresas que Macri tenía en el paraíso fiscal eran comunes. Las mismas se hacían para esconder datos sobre fortunas ilegales. La familia del ex primer mandatario había tenido causas de contrabando de autopartes y muchas obras públicas llenas del manto de la corrupción, como fue el escándalo de las cloacas del Partido de Morón durante el menemismo entre otros eventos

La base OpenCorporates informa que aún hoy en día Kagemusha S.A. (Compañía Número 71446) con estatus vigente y creada el 11 de mayo de 1981 bajo la figura de una

Sociedad Anónima radicada en la Provincia de Panamá (en la República del mismo nombre) tiene a Francisco Macri como Presidente, a Gianfranco Macri como Secretario y a Mauricio Macri como Director. Aunque el ex Presidente dijo haber cerrado esa “empresa de la que nunca tuve información porque mi Padre se encargaba de todo” sigue plenamente en movimiento. Las investigaciones en el país fueron bloqueadas y nadie pidió informes de movimientos desde que en el año 2007 asumió en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aún en diciembre de 2015, cuando llegó a la Casa Rosada, todo seguía en funcionamiento.

DATOS DE KAGEMUSHA S.A.

*Company Number 71446 | Native Company Number 71446S | Status Vigente | Incorporation Date 11 May 1981 | Company Type SOCIEDAD ANONIMA | Jurisdiction Panama | Registered Address PROVINCIA PANAMÁ Panama | Agent Name DE LA GUARDIAAROSEMENABENEDETTI
Directors / Officers DE LA GUARDIAAROSEMENABENEDETTI, agent | EL PRESIDENTE, representante ELOY BENEDETTI, tesorero ELOY BENEDETTI, suscriptor FRANCISCO MACRI, presidente FRANCISCO MACRI, director GIANFRANCO MACRI, secretario GIANFRANCO MACRI, director MAURICIO MACRI.*

El Juez Civil Andrés Fraga dictó la falta de mérito del ex Presidente Mauricio Macri en el marco de la investigación por las empresas que su familia esconde en los paraísos fiscales. En

el pedido de certeza (que es una figura legal) reclamados por los abogados del ex-mandatario emitió como sentencia el mismo texto de los defensores del líder ultraderechista.

Mauricio Macri y su padre Franco Macri tenían cerca de una docena de empresas en el extranjero. Las mismas fueron creadas en paraísos fiscales para evadir impuestos en la Argentina, país de origen de sus ganancias, en alguno de los casos con el contrabando y en otros con la corrupción en la obra pública en una práctica que arrancó en la dictadura militar y que se profundizó durante el menemismo. Actualmente han recrudecido las sospechas sobre el Grupo Socma.

El Juez Fraga, ligado al macrismo, dijo que había asumido la presidencia de Fleg Trading y Kagemusha “con la intención de renunciar y designar un reemplazante”. Los argumentos eran tan poco válidos como parcial era el magistrado que con su fallo prolongó la situación de sospecha.

Los gremios aeronáuticos confirmaron que el 20 de diciembre de 2018 se había incrementado en forma notoria la cantidad de camiones de caudales que llegaban hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En la mayoría de los casos dejaban sus bolsas con dinero en bodegas de aerolíneas extranjeras con destino a Estados Unidos y Panamá.

Desde que estaba el régimen macrista, los vuelos al exterior habían tomado como punto de nodo o trasbordo preferido la Ciudad de Panamá. Ello no sería casual. Desde el escándalo de los Panamá Papers, donde se descubrió que miles de empresarios argentinos (incluido el 90 % del Gabinete Nacional entre 2015 y 2019 y el propio ex Presidente Macri) escondían sus dineros en esas empresas fantasma.

“Es muy difícil rastrear el tema, porque incluso los vuelos a

Europa más baratos pasan por Panamá”, dijo un operador de una aerolínea de capitales chilenos que ha crecido su operatoria en el país valiéndose de una posición dominante gracias al acuerdo Macri-Piñera (Presidente de Chile y dueño de LATAM). “Incluso -agregó el empleado de embarque que pidió reserva de identidad- en los envíos no se distinguen muchas veces los bultos de documentación o de dinero ya que en ambos casos son de extrema seguridad y salen por un canal especial distinto al de los pasajeros por lo que no hay ningún control”.

Ello podría estar dejando chica la cifra de la fuga de capitales que muchos medios, incluido *TV Mundus* han publicado sobre el escape de capitales al exterior. Desde que asumió Macri en diciembre de 2015 se fugaron en forma “legal” cerca de u\$s 58 mil millones de dólares de los que el 50 % se escapó solamente en el 2018. Esto mostraba una aceleración en la corrupción, repitiendo el esquema de diciembre de 2001 cuando por la Autopista Richieri se veían filas de 10 a 20 camiones de caudales marchando al Aeropuerto. En enero de 2019, se había incrementado la cifra de unidades, que incluso embarcaban los fines de semana pasando por delante de quienes hacían (a falta de vacaciones reales) pic nics con sus familias a la vera de la calzada.

Prof. - Lic. Daniel do Campo Spada

Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social (UBA), Profesor Universitario en Ciencias de la Comunicación (UK), Especialista en Metodología de la Investigación Científica (UNLa) y Magister en Historia Contemporánea (UNGS).

Profesor en distintas instituciones Universitarias e Institutos de nivel medio.

Es periodista y dirige el Grupo TV Mundus (TV Mundus, Radio Mundus, Revista ECO Informativo, Komunicación).

Es miembro fundador del Grupo Interamericano de Reflexión Científica (GIRC), del Grupo de Conciencia Mariano Moreno (GCMM) y del Centro de Investigación Académico Latinoamericano (CEDIAL).

ALGUNAS OBRAS DEL AUTOR.

Octubre de Sangre (1984)

Perón a 10 años de su muerte (1984)

Mañana puedo morir. (1987)

Quizás ya no despierte. (1987)

Tan solo quería ser un hombre común. (1987)

La Patria Libre. (1987)

Cuidado con tus personajes. (1988)

La hermosa canción de Venny. (1990)

En busca del modelo. (1991)

Se afirma el modelo. (1992)
La “Revolución” de Mayo. (1993)
Las invasiones inglesas. (1993)
San Martín y el 9 de Julio. (1993)
La época de Rosas. (1993)
Mitre y la organización nacional. (1994)
Sarmiento en su tiempo. (1994)
Roca y la transformación de un país. (1996)
Colón, el espíritu de un pionero. (1996)
La revolución industrial. (1996)
Mundus Web. Bienvenidos al sexto continente. (2002)
El año del purgatorio (2003)
El otro mundo contra - ataca (2003)
La Comunicación como Órganon de la existencia. (2004)
E-Bosque. Ultimas noticias de la Sociedad Digital (2005).
Los Tres ciclos de Internet. (2007)
Reflexión Cristiana I. (2010)
A 20 pasos I. (2010)
1,2,3, WEB. (2010)
Semanario CGT. (2010)
Las Caretas de Heidi (2021)
Los Posdemocráticos (2021)
El Gato de Panamá. (2021)
La Era del Gato. (2021)

El Gato de Panamá – Daniel do Campo Spada

ISBN 978-987-88-0718-8



TV Mundus

Organización Multimedia de Noticias